



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I. ¹, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés

| | |
|--------------------|---|
| Radicación n°. | 05001 31 03 007 2022 00129 01 |
| Proceso. | Verbal – Responsabilidad Civil Contractual |
| Demandantes. | Reina Giovanna Lopera Echeverri, Jorge Rene Lopera Echeverri, Hugo Armando Lopera Echeverri y Esteban Camilo Lopera Echeverri, herederos determinados de Jorge Renato Lopera Lopera |
| Demandada. | Compañía de Seguros Bolívar S.A. o Seguros Bolívar S.A. |
| Procedencia. | Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín |
| Decisión. | Revoca rechazo |
| Tema. | Requisitos para la admisión de demanda |
| Rdo. interno. | 049-22 |
| Interlocutorio No. | 038-23 |

ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por la parte demandante en contra del auto del 17 de mayo de 2022, mediante el cual se rechazó la demanda de Verbal de responsabilidad civil contractual formulada por Reina Giovanna Lopera Echeverri, Jorge René Lopera Echeverri, Hugo Armando Lopera Echeverri y Esteban Camilo Lopera Echeverri, herederos determinados de Jorge Renato Lopera Lopera frente a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. o Seguros Bolívar S.A.

ANTECEDENTES

1.- Hechos y pretensiones. Presentaron Reina Giovanna Lopera Echeverri, Jorge René Lopera Echeverri, Hugo Armando Lopera Echeverri y Esteban Camilo Lopera Echeverri, en su calidad de herederos de Jorge Renato Lopera Lopera, demanda verbal en contra de la Compañía de Seguros Bolívar

¹ Acto Legislativo 01 de 2021, art. 1º. “La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.”

S.A. o Seguros Bolívar S.A., pretendiendo que se declarara a ésta responsable civil y contractualmente del pago de la obligación adeudada al Banco Davivienda, a cargo de Jorge Renato Lopera Lopera, asegurado con la póliza 45155, de acuerdo con el saldo de la misma para el 09 de julio de 2019, fecha de estructuración de la invalidez; así como del reembolso a los demandantes en su condición de herederos del asegurado, dado el fallecimiento de éste el 25 de julio de 2021, la suma que el causante o los sucesores hayan podido pagar respecto del crédito asegurado, conforme las coberturas de la póliza de vida grupo deudores.

Lo anterior, en razón de que el deudor había sido dictaminado con una pérdida de capacidad ocupacional del 73.17%, con fecha de estructuración el 09 de julio de 2019 y de origen común, notificado el 27 de agosto del mismo año, por lo que el deudor, a través de una de sus hermanas, había presentado reclamación a través Davivienda S.A., sociedad tomadora y beneficiaria, la cual había sido objetada por Seguros Bolívar S.A. el 14 de febrero de 2020, alegando reticencia en la declaración de asegurabilidad, decisión ratificada el 24 de agosto del mismo año.

Expuso que la deuda, al momento de la estructuración de la pérdida de capacidad laboral era alrededor de \$161'000.000, por lo que solicitó se condenara a la demandada a reconocer y pagar el valor asegurado, debiendo el Banco acreedor concretar el monto de la obligación para la estructuración del siniestro, y a reembolsar a los herederos las sumas pagadas por el deudor antes de su fallecimiento y por éstos con posterioridad al mismo, más los intereses de mora, regulados en el artículo 1080 del Código de Comercio o, en su defecto, a partir del mes siguiente de practicada la audiencia de conciliación prejudicial en derecho o, de ser el caso, conforme las previsiones del artículo 94 del Código General del Proceso.

2.- Trámite. Se asignó por reparto la demanda referenciada al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, el cual, mediante auto fechado 26 de abril de 2022, inadmitió la demanda, exigiendo entre otros requisitos:

“6. Determinar de modo preciso en el hecho once cuánto era el valor de la deuda para el momento de la estructuración de la pérdida de capacidad laboral (9 de julio de 2019), cuánto es el valor actual de la deuda, cuánto es

el valor asegurado, cuál es la suma que pretende para los aquí demandantes, con abstracción de la suma que se le adeuda al banco Davivienda, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 82 del C.G.P.”

“ ...”

“11. Precisara cada uno de los valores de la pretensión segunda, indicando de manera clara, la condena que se solicita a favor de cada uno. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 82 del C.G.P.

12. Precisar en la pretensión segunda los extremos temporales por los cuales solicita el rubro de intereses de mora, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 82 del C.G.P.

13. Hacer el juramento estimatorio siguiendo rigurosamente lo preceptuado por el artículo 206 del C.G.P, por cuanto el relacionado no discrimina el valor de la deuda para el momento de la estructuración de la pérdida de capacidad laboral (9 de julio de 2019), ni cuánto es el valor actual de la deuda, ni cuál es la suma que se pretende para los aquí demandantes con abstracción de la suma que se le adeuda al banco. No se indica de donde sale el valor relacionado en la estimación por \$161.000.000.

14. Informará en un hecho las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se realizó el pago de la prima del seguro objeto de este proceso, y de ser el caso allegará el respectivo soporte, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 82 del C.G.P.

15. Teniendo en cuenta que se solicita precisar en las pretensiones la suma que se pretende para los aquí demandantes con abstracción de la suma que se le adeuda al banco, deberá determinar de modo preciso la cuantía siguiendo rigurosamente lo prescrito en el artículo 26 del C.G.P., de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 82 del C.G.P.”

Dentro del término legalmente concedido, la parte demandante arrimó escrito en el que se pronunció frente a las exigencias que vienen de transcribirse, en el orden enunciado, para indicar:

En cuanto al requisito relacionado en el numeral 6°, señaló que de acuerdo a lo informado por la casa de cobro designada por el banco tomador del seguro y

acreedor el valor actual de la deuda, ascendía aproximadamente a la suma de \$164.340.000, pero desconocían si éste era el valor exacto; que tampoco tenían certeza sobre el valor asegurado y el valor para el momento del siniestro, pero que oscilaba en el orden de \$161.000.000; explicando que para obtener la referida información se había elevado petición ante el Banco Davivienda, el 05 de abril de 2022, al cual no se le había dado respuesta, por lo que solo sería viable su concreción una vez dicha entidad bancaria suministrara los referidos valores.

No obstante, precisó que si en el desarrollo del proceso los demandantes, hijos del asegurado, pagaban total o parcialmente la obligación referenciada, dicho monto debía ser reembolsado a los mismos más los intereses de mora que se les deba reconocer; y que no podía existir una abstracción a la suma adeudada a la entidad financiera, como lo exigía el Juzgado, debido a que dicha deuda al momento del siniestro (pérdida de capacidad laboral), constituía el valor asegurado en el contrato de seguro.

Respecto del requisito del numeral 11 del auto inadmisorio, expuso que lo pretendido era que la aseguradora le pagara al Banco Davivienda, el valor insoluto de la deuda que Jorge Renato Lopera Lopera tenía con dicha entidad financiera, para el momento de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, es decir, para el 09 de julio de 2019, desconociéndose el valor exacto de la deuda para esa fecha, pero que el aproximado era de \$161'000.000.

Además, resaltó que, debía considerarse que el monto a pagar a la entidad crediticia y a los demandantes, de ser el caso, solo podría establecerse al final del proceso, ante la generación de intereses, posibles pagos parciales o totales por parte de éstos, lo que hacía inviable establecer tales cuantías en un valor exacto, al inicio de la demanda.

Frente al requisito del numeral 12, precisó que el interés de mora se solicitaba, en forma principal, a partir del mes siguiente a la presentación de la reclamación, esto es, desde el 07 de octubre de 2019; subsidiariamente, a partir del mes siguiente a la celebración de la audiencia de conciliación prejudicial en derecho, es decir, desde el 07 de mayo de 2022; o, en su defecto de acuerdo con los parámetros contemplados en el inciso 2º del artículo 94 del Código General del Proceso. Y hasta el momento del pago efectivo.

Con relación a la exigencia enunciada en el numeral 13, expuso que, conforme a lo explicado con antelación, el monto del juramento estimatorio se realizaba en la suma de \$161'000.000, por corresponder al valor cobrado por la casa de cobranzas designada por la entidad acreedora a uno de los demandantes en marzo de 2022; reiterándose que debía esperarse que la entidad bancaria informara el monto exacto de la obligación para la fecha del siniestro.

Ante el requisito del numeral 14, afirmó no conocer cuándo se habían realizado los pagos de la prima del seguro, dado que los mismos estaban a cargo del deudor Jorge Renato Lopera Lopera, quien había fallecido; resaltando que tal aspecto no interesaba a la controversia, por cuanto la objeción al pago efectuada por la aseguradora no se cimentaba en la ausencia de la cancelación de dichas primas.

Finalmente, reiteró que se desconocía la cuantía exacta, de cara a lo exigido en el numeral 15, pues conforme a lo explicado, era el Banco Davivienda, quien tenía dicha información; sin embargo, señaló que tomando como referencia el valor que se le había informado por la casa de cobro para la fecha de estructuración de invalidez, era de \$161'000.000, y que esta cifra era superior a los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que se establecía en el inciso 4º del artículo 25 del Código General del Proceso, como monto de mayor cuantía, por lo que era competencia de los jueces civiles del circuito.

Posteriormente, el vocero judicial de la parte demandante, remitió la respuesta dada por el Banco Davivienda frente a la petición elevada con relación al crédito a cargo de Jorge Renato Lopera Lopera, en la que dicha entidad negó el suministro de la información requerida, en atención a la obligación que tenía esa entidad de resguardar la información financiera y crediticia de dicho cliente, para salvaguardar el derecho constitucional a la intimidad, toda vez que no se había acompañado a la respectiva petición poder conferido por el mismo para dichos fines y no se había podido obtener comunicación telefónica con éste.

3.- El auto apelado. Mediante auto fechado el 17 de mayo de 2022, el *a quo* rechazó la demanda, al estimar que la parte demandante no había cumplido a cabalidad con los requisitos trascritos en esta providencia, debido a que no se había indicado el valor exacto de la obligación adeudada por Jorge Renato Lopera Lopera, al Banco Davivienda, para la fecha de estructuración de la invalidez

(sinistro), el valor actual de la misma, monto asegurado y la suma que se pretendía a favor de los demandantes, lo que conllevaba a un incumplimiento de numeral 5° del artículo 82 del Código General del Proceso.

Señaló que, frente a la petición elevada al Banco Davivienda, para obtener la referida información, no era admisible la afirmación de la negativa a suministrar la información por parte de dicha entidad, pues acorde con lo indicado en la respuesta arrimada al expediente, se podía dilucidar que se había efectuado dos días antes de presentar la demanda, sin informarse el fallecimiento del deudor, ni acreditar la calidad en que la actuaban los peticionarios; además, el poder estaba dirigido a otra entidad, y que no se había logrado comunicación al móvil informado para tal efecto; esto, sumado a que, estaba vedada a las partes la posibilidad de solicitar la consecución de documentos que directamente hubiesen podido obtener a través del derecho de petición, conforme lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 78 del Código General del Proceso.

Indicó que por la misma razón no se había cumplido con la indicación de los valores de la pretensión segunda, careciendo la misma de precisión y claridad, conforme lo exigido en el numeral 4° del artículo 82 *ibídem*.

En lo que respecta a los intereses moratorios, expuso que se observa una petición principal y dos subsidiarias, sin que se expresaran los extremos temporales de los mismos, como se había requerido.

Con relación al juramento estimatorio, señaló que no se cumplía con lo establecido en el artículo 206 del Código General del Proceso, toda vez que no se discriminaba el valor de la deuda para el momento de la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, ni el valor actual de la misma, y que, ante dichos vacíos, se impedía el ejercicio del derecho de defensa de la contraparte, al no hacer viable la formulación de objeciones frente al mismo.

Por último, indicó que tampoco habían sido cumplidos los requisitos exigidos frente al pago de las primas de seguro y la determinación de la cuantía.

4.- La apelación. En contra de la decisión referenciada, la parte demandante, oportunamente interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo despachado desfavorablemente el primero, y concediéndose, en

consecuencia, el segundo, mediante auto del 21 de junio de 2022.

Adujo la parte demandante, como sustento de los recursos, que si bien no se indicó en el líbello genitor el valor de la deuda para la fecha de estructuración de la invalidez, como el monto actual de la misma, desde el inicio de la demanda se informó que dichas cifras nunca habían sido manejadas por los demandantes, y que, en razón de tal circunstancia, se había solicitado al Banco Davivienda, esa información.

Ahora, frente al estudio que realiza el juzgado respecto de la respuesta dada por dicha entidad financiera, indicó que no se tuvo en cuenta que se trata de un formato, pues se afirmó que no habían podido comunicarse con la poderdante, y aluden los tres dígitos con los que inicia el número celular y los dos últimos, que no corresponden al móvil de REINA GIOVANNA LOPERA, quien fue la que le otorgó el poder; además, cuestiona el hecho de que afirmen que trataron de obtener comunicación con ella y no con el abogado, cuando éste fue quien realizó la solicitud, aportando el número celular y el correo a través del cual podían contactarlo, siendo este último el medio por el cual había remitido la petición; finalmente, precisó que se había aportado poder otorgado por los demandantes para la presentación de esta demanda, dado que en el texto de la solicitud se indicaba que la información requerida era para el formulación de la misma.

Así las cosas, adujo que del escrito allegado para subsanar la demanda se podían extraer los supuestos fácticos para que la misma fuese admitida, salvo lo relacionado con el valor exacto asegurado, que no había sido posible aportar y que, si bien la petición a la entidad financiera se había efectuado dos días antes de la presentación de esta acción, también lo era que la respuesta por parte de la misma, había sido incompleta y se había emitido dentro del término para subsanar la demanda.

Con relación a las exigencias realizadas frente a la precisión de los valores de la pretensión y el juramento estimatorio, expresó que se aducía el mismo argumento y, respecto de éste último, además adujo que el artículo 206 del Código General del Proceso, contemplaba que el mismo era prueba de su monto mientras su cuantía no fuera objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo.

Frente a los extremos temporales de los intereses expuso que, si bien no estaban determinados, si eran determinables, solo que había solicitado uno en subsidio del otro, dadas las diferentes posiciones que se presentaban con relación al momento a partir del cual era procedente su cobro.

En relación con las circunstancias de lugar tiempo y modo sobre el pagó la prima, reiteró que no eran conocidas por los demandantes, en razón de que el contrato había sido celebrado por el padre de éstos y ya había fallecido, pero que ese hecho era irrelevante para el debate jurídico planteado, debido a que la objeción de la aseguradora se había cimentado en la existencia de una reticencia.

En cuanto a la cuantía, esto es el valor exacto de lo pretendido por los demandantes, señaló que, tal como se había referenciado, esta solo podía determinarse de manera exacta al final del litigio, por lo que en el líbello genitor se había pedido la cancelación de la obligación al Banco acreedor para el momento de la estructuración, advirtiéndose que de haberse cancelado algún valor por el deudor o sus herederos con posterioridad, antes o durante el adelantamiento de esta demanda, les fuera reembolsado.

5.- Decisión de la reposición. Mediante auto del 21 de junio de 2022, se mantuvo incólume la decisión reparada horizontalmente, reiterando los argumentos esbozados en el auto que rechazó la demanda, para colegir que: *“no se determinó de modo preciso el hecho once, ii) la pretensión segunda no es expresada con precisión y claridad, toda vez que fue formulada en forma imprecisa (numeral 4 del artículo 82 del C.G.P.), iii) la pretensión segunda no es expresada con precisión y claridad, en tanto no se indicaron los extremos temporales de los intereses de mora, ni la suma sobre la cual se generan, iv) tampoco se cumplió con el requisito del juramento estimatorio (numeral 7 del artículo 82 ibidem), porque no se discriminaron sus conceptos (Art. 206 ejusdem), y v) no se cumplió con el requisito dispuesto en el numeral 9 del artículo 82 ibidem”*.

CONSIDERACIONES

1.- De los requisitos de la demanda. Enunció el legislador los requisitos que debe contener cualquier demanda, así como los anexos generales que deben adunarse a la misma en los artículos 82 y 84 del Código General del Proceso,

respectivamente.

Estatuye la primer preceptiva entre otros:

“4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad”. Que se refiere a las súplicas o pedimentos respecto de los cuales se fundamentará el debate procesal y tema de la decisión de fondo a tomarse en la sentencia

5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados. Que alude a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las que se infiere o estructura la pretensión.

7. El juramento estimatorio, cuando sea necesario.” Es la estimación sobre la cantidad a la que considera el demandante equivale una indemnización, compensación, frutos o moras, lo cual debe afirmarse en la demanda bajo la gravedad de juramento y que sirve como medio probatorio de dicho valor, en los casos establecidos en el precepto 206 del Código General del Proceso.

8. La cuantía del proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite”. Tal como se precisa en el requisito, este debe cumplirse cuando se requiera para la determinación de la competencia o del respectivo trámite, debiendo ceñirse a las reglas contempladas en el precepto 26 del Código General del Proceso.”

Así las cosas, corresponde al funcionario judicial, una vez se le asigne el conocimiento de determinado asunto, verificar el cumplimiento de dichas exigencias, con el fin de evitar un desgaste en el aparato judicial, pues en cierta medida lo que se pretende, es garantizar la emisión de una decisión de fondo que defina la controversia objeto de debate, evitando nulidades futuras o fallos inhibitorios.

Así las cosas, la exigencia de dichos requisitos mínimos razonables para la admisión de la demanda, busca hacer más viable el derecho de acceso a la administración de justicia, garantizando los derechos de quienes intervienen en el proceso; sin que le sea dable al operador jurídico exigir *“formalidades innecesarias”*, según el mandato del artículo 11 del citado Estatuto Procesal en su parte final.

En este sentido, ha señalado la jurisprudencia que los requisitos para

inadmitir una demanda, son estrictamente los enlistados por el legislador y, por ende, no pueden exigirse adicionales²:

“[E]l legislador ha señalado varios correctivos o mecanismos tendientes a que se reúnan los requisitos contemplados en la norma procesal, pues de su inobservancia se producirá la inadmisión y el eventual rechazo.

Por lo anterior, es necesario que el juez señale con precisión los defectos de que adolezca, de suerte que el funcionario tiene a su cargo la labor de particularizar minuciosamente los elementos que deben ser enmendados, para evitar posteriores irregularidades procesales.

*No obstante, dada la naturaleza restrictiva de las normas que dan lugar a la inadmisión, y considerando que el incumplimiento del apremio que ordene corregir las falencias de la demanda (el incumplimiento de los puntos a subsanar), provocan el rechazo de la misma, **las causales previstas por el legislador en la codificación adjetiva son estrictamente taxativas.**”* (Resalto intencional).

Ahora, además de los requisitos y anexos que se enuncian en las citadas preceptivas, deben considerarse los que se establezcan de manera especial para un proceso específico, tanto en dicha regulación procesal, como en cualquier otra disposición normativa, conforme lo señala el artículo 82, en su numeral 11 y el artículo 84, en el numeral 5.

Lo anterior, con el fin de que se brinde todos los elementos indispensables al juez cognoscente para que emita una decisión de fondo, esto es, las bases sobre las cuales se adelantará determinado proceso y lo que se pretende con el mismo, además de garantizarle a la contraparte su derecho de defensa.

2.- De la inadmisión y rechazo de la demanda. Contempla el precepto 90 del Código General del Proceso, que el funcionario judicial puede inadmitir una demanda y conceder el término de cinco (5) días para que la parte demandante subsane los vicios de forma que advierta, esto es:

“1. Cuando no reúna los requisitos formales.

2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.

² Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil. Auto del veintiocho (28) de julio de 2021, Exp. 028-2020-00299-01. M.P. Luis Roberto Suárez González.

3. *Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales.*
4. *Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.*
5. *Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso.*
6. *Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario.*
7. *Cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.”*

Así mismo, señala que cuando vencido el término legalmente concedido a la actora para adecuar la demanda o cumplir con las exigencias que se enunciaron en auto inadmisorio, sin que así lo haya hecho, procederá el rechazo de la demanda.

Al tenor de lo establecido en el inciso 5° de la citada pauta, los recursos que se formulen contra el auto que rechace la demanda, proceden igualmente contra el inadmisorio, por ser en este último que se exigen los requisitos omitidos o indebidamente cumplidos, y que sirven con posterioridad, como fundamento al rechazo de la demanda. En esa medida, la alzada es escalonada, en tanto no se concentra estrictamente en el rechazo y abarca la inadmisión, como objeto total del recurso.

3.- Caso concreto. Presentaron Reina Giovanna Lopera Echeverri, Jorge René Lopera Echeverri, Hugo Armando Lopera Echeverri y Esteban Camilo Lopera Echeverri, en su calidad de herederos de Jorge Renato Lopera Lopera, demanda verbal en contra de la Compañía de Seguros Bolívar S.A. o Seguros Bolívar S.A., pretendiendo que se declarara a ésta responsable civil y contractualmente del pago de la póliza No. 45155, a favor del Banco Davivienda por haberse cumplido el siniestro amparado en la misma, esto es, la invalidez del deudor.

Sin embargo, al realizar el estudio de la demanda, consideró el *a quo*, que era necesario el cumplimiento de varios requisitos para su admisión, y a pesar de que la parte demandante arrió, dentro del término legalmente concedido, escrito pretendiendo acatar los mismos, la demanda fue rechazada por considerarse que no habían sido observados a cabalidad, decisión de la cual disiente el recurrente en alzada, al considerar que algunos no eran procedentes y que otros fueron cumplidos.

Por tanto, corresponderá a esta corporación verificar si todos los requisitos exigidos se encuentran contemplados legalmente como causales de inadmisión y seguidamente, si de ser procedentes, fueron atendidos por la parte demandante en debida forma.

En cuanto a los requisitos enunciados en el numeral 6 y 11 del auto inadmisorio, que en ambos casos exigían el monto exacto de la obligación adeudada al Banco Davivienda, para la fecha de la estructuración de la invalidez, el actual, y el asegurado, así como el pretendido por los demandantes, considera este Tribunal que los mismos eran innecesarios, pues desde el líbello genitor originario, se explicó que los demandantes no contaban con los valores exactos relacionados con el crédito adeudado a la citada entidad financiera, ni la información relacionada con el contrato de seguro, razón por la cual, había elevado petición al Banco acreedor para que informara dichos aspectos.

Ahora, estima esta corporación que dicha exigencia era inocua, pues no tiene fundamento que el operador jurídico exija se informen unos hechos que la parte ya ha manifestado desconocer, pero además, porque en el escrito introductorio, si bien no se informaron valores exactos, si se indicaron los valores que se estimaron eran los adeudados para las fechas requeridas, y la fuente de los mismos, por lo que no era vago o gaseoso lo narrado y pretendido por los demandantes, correspondiendo a la parte demandada, dentro de la oportunidad procesal respectiva, controvertir y acreditar tales rubros.

Por tanto, no podría afirmarse que la pretensión era carente de precisión y claridad, ni mucho menos que no se habían determinado los hechos, pues como viene de explicarse, desde el inicio se había relacionado que lo pretendido era la declaratoria de incumplimiento por parte de la demandada del contrato de seguro celebrado con el padre de los demandantes, cuyo objeto era garantizar el pago de la obligación que éste adeudaba al Banco Davivienda, para el momento de la ocurrencia del siniestro (invalidez), y que en el evento de que los actores cancelaran la obligación parcial o totalmente en el curso del proceso se le reconociera a los mismos.

Así mismo, los supuestos fácticos fundamento de esta pretensión, también fueron relacionados y determinados en la demanda, donde se expuso la celebración del contrato de seguro, la ocurrencia del siniestro, la objeción al pago

efectuado por la aseguradora demandada frente a la reclamación.

Ahora, el hecho de no tenerse cifras exactas relacionadas con el crédito que se pretende sea cancelado por la demanda, no puede ser una barrera para que los actores acudan a la administración de justicia, máxime cuando éstos aducen su desconocimiento por no haber sido parte de las relaciones contractuales que fundamentan las pretensiones, informan valores que estiman aproximados y explican la procedencia de los mismos, pudiendo concretarse dentro del trámite del proceso.

Acorde con lo anterior, resulta desprolijo entrar a determinar si la petición elevada por la parte demandante a la entidad financiera, pretendiendo obtener la información sobre el crédito adeudado por Jorge Renato Lopera Lopera, fue elevada oportunamente y con el cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se exigen, y menos a examinar la respuesta dada por el Banco.

Respecto del requisito del numeral 12, consistente en que se informaran los extremos temporales sobre los cuales pretendían intereses moratorios, debe indicarse que si bien se había omitido indicar el extremo final, siendo procedente la inadmisión para que se precisara éste, respecto a la inicial se había indicado que se pretendía *“los regulados por el Código de Comercio en su artículo 1080, modificado por el parágrafo del artículo 111 de la ley 519 de 1999 o en su defecto, un mes luego de practicada la audiencia de conciliación prejudicial en derecho, o por último, conforme las previsiones del artículo 94 del Código General del Proceso”*, por lo que, si bien no estaba expresamente indicada, podía deducirse.

Posteriormente, al cumplirse los requisitos, además de dichos parámetros se expresaron las fechas a partir de las cuales de manera principal y subsidiaria se pretendía, y además se agregó el extremo final, al indicarse que se pretendían hasta el *“pago efectivo”*, por lo que contrario a lo señalado por el juez de primera instancia, este requisito si fue cumplido.

En cuanto al juramento estimatorio, tenemos que la norma 206 del Código General del Proceso, lo exige para cuando se pretenda *“el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras”*, sin que ninguna de éstas sea lo pretendido en esta demanda, por lo que el mismo no era estrictamente necesario, y aún bajo el supuesto de requerirse, debe indicarse que,

contrario a lo señalado por el a quo, la parte demandante cumplió con realizar la estimación de la obligación que pretendía fuera cancelada por la aseguradora demandada, señalando como tal la suma de \$161.000.000, que no necesariamente debe coincidir con el valor de la obligación.

Referente al requisito del numeral 14, esto es, la indicación de condiciones de tiempo, modo y lugar de pago de las primas de seguros, debe indicarse que respecto de este hecho opera la ausencia de conocimiento aducido por los demandantes, pero, además, al no incluirse en las pretensiones de la demanda, el reembolso de primas canceladas, este hecho resultaba irrelevante para soportar las mismas, por lo que su exigencia resultaba improcedente, con fundamento en el numeral 5° del artículo 82 del Código General del Proceso.

Finalmente, tenemos que, frente al requisito del numeral 15 que exigió la determinación de la cuantía, también resultaba improcedente, ya que en la demanda primigenia se había señalado que se trataba de un asunto de mayor cuantía, atendiendo al monto que se indicó como el adeudado para la fecha del siniestro; sin embargo, si lo requerido por el despacho judicial era que se indicará de manera expresa, en el acápite cuantía, dicho valor, al presentarse escrito subsanando los defectos, la parte demandante realizó dicha anotación, con lo que se cumplió tal exigencia.

Corolario con lo expuesto, los requisitos legales, esto es, los expresamente contemplados por el legislador como causales de inadmisión, fueron cumplidos cabalmente por la parte demandante, en el término concedido para tal efecto, por lo que no había lugar a rechazar la demanda.

CONCLUSIÓN.

En consecuencia, se revocará la decisión apelada, para, en su lugar, ordenar que el juzgado de primera instancia, proceda con la admisión de la demanda, considerando que fueron cumplidos todos los requisitos que dieron lugar a la inadmisión de la misma.

No se condenará en costas, atendiendo a lo establecido en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, por cuanto las mismas no se

causaron.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, **REVOCA** el auto proferido por el JUZGADO DIECISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el 17 de mayo de 2022, dentro del proceso VERBAL de responsabilidad civil contractual instaurado por REINA GIOVANNA LOPERA ECHEVERRI, JORGE RENE LOPERA ECHEVERRI, HUGO ARMANDO LOPERA ECHEVERRI Y ESTEBAN CAMILO LOPERA ECHEVERRI, herederos determinados de JORGE RENATO LOPERA LOPERA, en contra de la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. O SEGUROS BOLÍVAR S.A., por las razones esbozadas en la motivación y, en su lugar,

RESUELVE.

PRIMERO. SE DISPONE que el juzgado originario vuelva al examen preliminar de admisibilidad sin que pueda proveer su rechazo con base en los requisitos examinados en esta instancia y considerados como improcedentes y cumplidos.

SEGUNDO. Sin lugar a condena en costas.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO
Magistrado